

Talca, diecisiete de abril de dos mil veintiuno.

**Vistos:**

Se reproduce la sentencia definitiva de fecha diecisiete de julio de dos mil diecinueve, dictada en autos rol C-223-2018 del Tercer Juzgado de Letras de Talca, caratulados “PARADA/FISCO DE CHILE”, con excepción de sus considerandos décimo y décimo primero, los que se eliminan, manteniéndose lo demás,

**Y se tiene además presente:**

**En cuanto al recurso de apelación de la parte reclamante:**

**PRIMERO:** Que, la abogada María Magdalena Bravo Cortez, en representación de la parte reclamante, interpone recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva de fecha 17 de julio de 2019 que se rechaza la demanda deducida por **HERMAN HIPÓLITO PARADA LUNCUMILLA, LUCÍA INÉS PARADA LUNCUMILLA, NORA ROSA PARADA PARRA, ROSA ESTER PARADA PARADA, HÉCTOR MARCELINO PARADA PARADA**, en contra del **FISCO DE CHILE**, sin costas.

Refiere que con fecha 26 de enero de 2018 presentó demanda de reclamación de acto expropiatorio a fin de que se dispusiera la expropiación de otras dos porciones del inmueble expropiado denominado Parcela 147 del Proyecto de Parcelación San José, Rol de Avalúos 202-118, en la comuna de Longaví.

Explica que las expropiaciones nacieron y se originaron desde la fecha en el Ministerio de Obras Públicas obtuvo Resolución de Calificación Ambiental favorable el año 2006 para construir y operar el Embalse Ancoa y en cuya virtud el titular se obligó al cumplimiento de compromisos medioambientales de reforestación y en relación al área comprometida en el Embalse Ancoa, cuya superficie inundada osciló entre las 250 y 280 hectáreas, posteriormente, indica que el 2015, la Superintendencia de Medioambiente en conjunto con CONAF realizó un monitoreo y fiscalización de la realización de dichos compromisos, y debido a que no se dio cumplimiento cabal correspondía iniciar un procedimiento sancionatorio con las correspondientes formulaciones de cargos, indicando que estos son los antecedentes que originaron las cinco expropiaciones en que se vio afectada la propiedad de sus representados.

Refiere que el inmueble tenía una superficie original de 228,4 hectáreas, y fue objeto de 5 expropiaciones de las que da cuenta la reclamación de autos, producto de las que quedaron dos retazos no afectados por las expropiaciones, denominados Sectores B y C de 54,472 hectáreas y de 26,891 hectáreas respectivamente, porciones de terreno que quedaron dividas, segmentadas, sin comunicación, aisladas e imposibilitadas de producción y explotación todo ello



debida y latamente acreditado y probado en las diversas probanzas que constan en autos.

Indica que el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile contestando la demanda solicitó rechazar íntegramente la demanda, señalando, entre otras cosas, que no procede la expropiación adicional cuando el terreno que se pretende se expropie no pueda ser por sí mismo fruto de cualquier tipo de explotación, uso o aprovechamiento, estimando que los sectores no expropiados podrían tener diversos usos., dado la cabida o extensión de los sectores de terreno que se intenta incluir en la expropiación son considerables como para poder realizar actividades económicas, de forma que, como la carencia de significación económica debe ser total y no respecto de un uso en específico o respecto de una circunstancia específica como lo sería la falta de acceso no puede ser motivo único de una ampliación de una expropiación, pues dicho problema se soluciona a través de la constitución de una servidumbre de tránsito en favor del inmueble si ha quedado aislado del camino público, de forma que la inexistencia de accesos no es impedimento per se al ejercicio de todo emprendimiento o de cualquier uso, explotación productiva o actividad económica y humana, sino que es sólo una circunstancia que obliga al dueño a buscar una nueva forma de tener acceso.

Hace presente que la jurisprudencia de la Corte Suprema ha entendido por “pérdida de significación económica en la expropiación” que no pueda seguirse utilizando en la misma forma en que se hacía antes del acto expropiatorio.

Se refiere y enumera la prueba documental y testimonial presentada en autos, haciendo especial énfasis en la diligencia de inspección personal decretada por el tribunal y realizada el 17 de enero de 2019 a las 14:03 horas, en donde se dejó constancia en el acta que se observó que entre los sectores expropiados y los que no lo han sido se encuentran en general incomunicados, quedando aislados uno del otro, con espacios importantes de superficie de terreno en las zonas intermedias.

Indica la sentencia impugnada concluyó que no concurre el presupuesto fáctico establecido por el legislado pues sus eventuales dificultades de conexión y abastecimiento de aguas son susceptibles de salvarse mediante la válida constitución de los respectivos derechos reales de servidumbres de tránsito y acueducto en favor del reclamante, más si la aptitud ganadera y forestal de los inmuebles puede desarrollarse sin que para ello sea indispensable la expropiación adicional solicitada teniendo especial consideración además las características del inmueble, que sería inculto, en forma irregular y con vegetación nativa, lo que habría sido constatado por el tribunal en la inspección respectiva, de forma que la regla permisiva contenida en el artículo 384 N°2 del Código de Procedimiento Civil, cede ante el valor de plena prueba que le confiere al artículo 409 de la



recopilación en estudio a la inspección personal del tribunal, de forma que desestima la acción intentada.

Fundamenta su recurso de apelación señalando que el estándar que fija el legislador es claro y preciso y no es otro que el indicado en el artículo 9 letra b del Decreto Ley 2186, norma que reproduce, junto a jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema.

Indica que como primer antecedente los hechos acreditados en la causa por medio de las distintas probanzas demuestran el completo y total aislamiento de dos sectores no expropiados en la Parcela 147 del proyecto de parcelación San José de la comuna de Longaví, este aislamiento quedo acreditado por los siguientes medios de prueba: 1) Análisis y estudio de plano croquis acompañado a fojas 45; 2) Plano planímetro elaborado por el profesional Sr. Alejandro Mery Castillo acompañado a fojas 45; 3) Inscripción de derechos de aprovechamiento de aguas en favor de la Parcela 147 correspondientes a la no despreciable cantidad de 50L/s, acompañada a fojas 45; 4) Los testigos cuyas declaraciones se encuentran a folio 50, son contestes y precisos en el sentido de declarar el aislamiento si vías de acceso, sin caminos de los sectores no expropiados y sin posibilidad de acceder a los derechos de aprovechamiento de aguas por cuanto por donde estos devienen son propiedad del Fisco; y 5) Inspección personal del tribunal a la que ya se hizo referencia, cuestión que no fue abordada en el considerando décimo primero del fallo de primera instancia, otorgándole plena prueba, pero a la vez indicando que es la razón por la que la acción enderezada en autos debe ser desestimada.

Concluye que es un hecho completamente acreditado en autos el aislamiento e inexistencia de accesos o caminos lo que hace que en la actualidad no permita el ejercicio de alguna de las facultades que otorga el dominio ni actividades productivas de ninguna especie, lo que le lleva a sostener que en la sentencia apelada existe una errada interpretación de las normas sustantivas que llevó al sentenciador a no dar lugar a la demanda en circunstancias que la correcta aplicación del artículo 9 del Decreto Ley 2186 no puede sino conducir a la conclusión de que el predio se ha hecho más difícil o prácticamente imposible en cuanto a su explotación o aprovechamiento, sin que resulto lógico afirmar, como lo hace la sentencia, que el aislamiento de un terreno no puede constituir una imposibilidad o dificultad de aprovechamiento o explotación pues existe la posibilidad de abrir una vía de acceso a través de Servidumbre de tránsito y acueducto.

Alega que la circunstancia de que a futuro pudiere disponerse de servidumbres es un acontecimiento del que no existe certeza, sin ser menos cierto que la demora en ser constituida más aún si es judicial considerando que se debe indemnizar al propietario del predio sirviente, sin tener presente que entre tanto los sectores no



expropiados no podrán ser trabajados o aprovechados debido a la posibilidad de acceder y realizar en ellos los trabajos agrícolas que le son propias, además de tratarse de un daño directo e inmediato causado por la expropiación.

Arguye que el fallo apelado señala que no concurre el presupuesto fáctico establecido por el legislador, sin embargo, hace presente que el artículo 9 del Decreto Ley 2186 establece como primer supuesto que la parte o partes afectadas carecieran por sí solas de “significación económica”, siendo evidente que la unidad económica denominada parcela 147 y conformada por una propiedad de características agroindustriales en su contexto total perdió toda su significación económica no solo al ser desmedrada como unidad, sino que fue dejada sin comunicación entre dos o más sectores de dicha unidad, sin accesos ni caminos y sin poder utilizar los derechos de aprovechamiento de agua debidamente inscritos, afectando el valor económico de cualquiera de los dos retazos reclamados, B y C, por la serie de características que la conformaban previo a las expropiaciones teniendo como consecuencia que la significación económica de lo reclamado no guarda relación a la plusvalía anterior, quien podría querer comprar o adquirir retazos en las condiciones que quedaron con posterioridad a la expropiación.

Luego, señala que el artículo 9 referenciado, establece en segundo lugar que, si hiciere difícil su explotación o aprovechamiento, a la luz de los antecedentes y pruebas allegadas a la causa, testigos, inspección personal del tribunal, queda claro que la explotación o aprovechamiento de ambos retazos en las condiciones que quedaron con posterioridad a la expropiación. Igualmente, indica que el artículo 9 en comento establece que si hiciere difícil su explotación o aprovechamiento, quedando en claro, mediante la prueba rendida en autos, que la explotación o aprovechamiento de ambos retazos excede con mucho al segundo presupuesto establecido por el legislador, de forma que la sola construcción e implementación de una servidumbre de acueducto implicaría realizar obras de ingeniería no menores a objeto de poder conducir las aguas provenientes del estero los Mogotes, hoy ubicado en los lotes expropiados, a los sectores denominados B y C de la Parcela 147, asimismo, indica que serían de cargo de los propietarios afectados por la expropiación de las obras tendientes a la constitución del camino que habilite la eventual explotación y producción del predio.

Por último, indica que el artículo 9 ya citado establece que se haga prácticamente imposible su explotación o aprovechamiento, cuando la realidad de ambos retazos es que efectivamente no pueden ser explotados por carecer de condiciones y características que tenían previo a la expropiación y que los hacían plenamente productivos, situación hoy por hoy imposible de realizar.

Hace presente que las cinco expropiaciones que afectaron a la Parcela 147 obedecen al cumplimiento de los compromisos ambientales relativos a la



reforestación del área comprometida en el embalse Ancoa cuya superficie inundado oscila entre las 250 y 280 hectáreas, de forma que no habiendo cumplido dichos compromisos por parte del Ministerio de Obras Públicas, y luego del procedimiento sancionatorio y multas correspondientes, la DOH se vio obligada a presentar un programa de cumplimiento y dentro de ello a expropiar superficie de terreno para reforestar y mitigar los perjuicios sobre la zona inundada y sus obras conexas, de forma que la superficie expropiada corresponden a una obligación que involucra una superficie determinada la que no puede ser reducida o disminuida por cuanto implicaría tener que realizar otras expropiaciones, ello deviene necesariamente en que la obtención de terreno dentro de los lotes expropiados para construir servidumbres de tránsito o acueducto no podrían ser otorgadas producto de las obligaciones contraídas con la Superintendencia del Medioambiente, vale decir, que la opción de que pudieran constituirse estos derechos reales no es en realidad una posibilidad a la cual la DOH se allane con los propietarios, producto de algo tan simple, como lo son sus obligaciones ya contraídas.

Es más, no solo dichas constituciones deberían ser aceptadas o impuestas judicialmente al ente estatal ya mencionado, sino que además habría que requerir los permisos y ejecutar los planes de manejo exigidos por CONAF en este tipo de situaciones, debiendo los propietarios allanarse para mitigar el derribo de bosque nativo ya existente producto de las servidumbres que eventualmente podrían constituirse, obligándose a mis representados a plantar en otros sectores dichas especies nativas como medidas de mitigación exigidas en estos casos, sin perjuicio de los elevadísimos costos que implicaría para los propietarios toda la tramitación, autorizaciones, procesos judiciales, indemnizaciones, y posterior implementación y construcciones de las obras requeridas, existirá un lato lapso de tiempo que llevaría varios años, por lo que, finalmente, existe la posibilidad real y cierta que dichas servidumbres no puedan ser constituidas por cuanto es una eventualidad que no depende únicamente de la voluntad de sus representados.

Así, arguye que las opciones para la constitución de tales derechos reales invocadas en su defensa por el Consejo de Defensa del Estado y refrendadas en la sentencia definitiva de autos en la práctica implican necesariamente un detrimento económico no solo por los costos que ello implica, sino por el tiempo que estarán sin actividad económica ni producción.

Por último, señala que en consideración a la situación actual de los sectores expropiados no es menos cierto que la expropiación ha limitado las facultades esenciales que otorga el dominio, no solo en el uso y goce, sino que también en la facultad de disposición con la que cuentan los propietarios de los retazos demandados, pues ante una eventual enajenación de dichas porciones sus representados verán entorpecida cualquier negociación o acuerdo respectivo por



cuanto en las condiciones en que se encuentran los retazos no expropiados su valor comercial es igual a cero, ya que no son aptas para actividad productiva alguna.

Cita el artículo 19 del Código Civil y argumenta que por lo establecido en el artículo 9 letra B, en relación con la letra C del Decreto Ley 2186 y los antecedentes de hecho acreditados latamente en la causa se evidencia que el Juez *a quo* no ponderó la debida aplicación en su fallo de la normativa legal que se ajusta al caso, citando amplia jurisprudencia al efecto.

Refiere que el citado artículo 9 del Decreto Ley 2186 establece no una sino tres hipótesis, todas conjugadas con la preposición “o” y cada una de ellas se da en la especie de este caso, además de que la Corte Suprema ha establecido claramente lo que se debe entender por pérdida de significación económica en el sentido que no pueda seguirse utilizando en la misma forma que se utilizaba antes del acto expropiatorio, es a todas luces evidente, que los dos retazos que se solicita se adicionen a la expropiación no pueden en los hechos reales utilizarse en la forma en que se explotaban antes de dicho acto expropiatorio, y si pudieren en el futuro tener una aptitud con características análogas a las previas a la expropiación esto sería con cargo a constituir diversas servidumbres y realizar trabajos de ingeniería todo ello con los correspondientes desembolso de los propietarios ya afectados con la expropiación.

Finalmente, cita el artículo 19 N°24 de nuestra Constitución Política de la República, y solicita la revocación del fallo de primera instancia cuya sentencia definitiva causa un real perjuicio para sus representados.

Por todo lo expuesto, solicita que se revoque la sentencia apelada, y de lugar y acoja total o parcialmente la demanda y reclamación de acto expropiatorio deducido por los propietarios afectados; que se disponga por el Fisco de Chile la expropiación de otras porciones del inmueble parcialmente expropiado, retazos que se singularizan debidamente como sector B de 54,472 hectáreas aproximadas de superficie y sector C de 26,981 hectáreas aproximadas de superficie, ambos retazos determinados y singularizados en autos; que, en subsidio de lo anterior, se disponga solo la expropiación del sector B, de 54,472 hectáreas aproximadas de superficie o en aquella extensión que determine esta Corte; que decrete la entidad expropiante dentro del plazo y bajo los apercibimientos legales, ordene la emisión de un o acto(s) expropiatorio(s) adicional(es) o modificadorio(s) que contengan las menciones señaladas en el artículo 6 del Decreto Ley 2186 y; que se condene a la demandada al pago de las costas de la causa.

**SEGUNDO:** Que, el artículo 9 del Decreto Ley N°2186 establece que: “*Dentro del plazo de treinta días, contados desde la publicación en el Diario Oficial del acto expropiatorio, el expropiado podrá reclamar ante el juez competente para*



solicitar: (...) b) *Que se disponga la expropiación total del bien parcialmente expropiado cuando la parte no afectada del mismo careciere por sí sola de significación económica o se hiciera difícil o prácticamente imposible su explotación o aprovechamiento; c) Que se disponga la expropiación de otra porción del bien parcialmente expropiado, debidamente individualizada, cuando ésta, por efecto de la expropiación se encontrare en alguna de las circunstancias antes señaladas*”.

Normativa con respecto a la que nuestra jurisprudencia ha señalado que: “*el artículo 9 letra b) del Decreto ley N°2186 no contempla como única causal la imposibilidad absoluta de desarrollar una actividad económica, sino que dispone que basta que la explotación del terreno sea muy difícil, cuestión que claramente se configura en la especie toda vez que la superficie no expropiada tiene una forma alargada y triangular que dificulta indudablemente la realización de actividades económicas, pues existe una gran extensión afecta a la restricción del artículo 39 del D.F.L N°850, cumpliéndose con el estándar exigido en la ley. A su turno, es inconcuso que tal circunstancia impacta en la significancia económica del inmueble*” (Sentencia Corte Suprema de fecha 22 de enero de 2018, Rol 36788-2017).

**TERCERO:** Que, respecto al punto anterior, nuestros tribunales superiores de justicia han concordado en que: “*(...) En efecto, no cabe examinar la situación “del bien parcialmente expropiado” acudiendo a otros inmuebles distintos de él, pues la autorización legal para disponer la expropiación total del mismo, dado su carácter excepcional, tiene un sentido acotado y claramente determinado, que dice relación con la significación económica o con la explotación o aprovechamiento de la parte no afectada del mismo*” (Sentencia Corte Suprema de fecha 12 de mayo de 2020, Rol 11919-2019, considerando undécimo), de forma que cada uno de los lotes cuya expropiación se solicita en estos autos debe ser analizado por su cuenta.

**CUARTO:** Que, así las cosas, con respecto a “Sector B”, la declaración de los testigos Alejandro Mery Castillo, Vicente Ruiz Roky, y Eric Paredes Vargas, dan cuenta que este sector queda efectivamente sin acceso a caminos públicos y sin aprovechamiento de aguas, quedando totalmente encerrado por los terrenos ya expropiados, declaraciones que cumplen con los requisitos del artículo 384 N°2 del Código de Procedimiento Civil para darles valor de plena prueba, la que no se contradice con lo observado en la inspección tribunal de autos, que en virtud del artículo 408 del mismo cuerpo legal también tiene valor de plena prueba, en donde se señala que: “*Desde aquel lugar se pudo observar hacia el Este y el Sureste las mismas particularidades en relación a las características del inmueble en este sector, esto es, un plano que se encuentra inculto, de forma irregular, con vegetación correspondiente presumiblemente a flora nativa, no siendo posible*



*para el suscrito identificar el tipo de especies arbóreas ahí existentes, pero al parecer no corresponden a pinos. Se trata de una superficie de terreno amplia, que también concuerda con la descripción que los reclamantes en el plano acompañado por ellos identificaron como “Sector B”, el que no habría sido expropiado. (Fotografía N°2).*

*Finalmente nos dirigimos hacia el suroeste del punto en que nos encontrábamos anteriormente, constatando las mismas características ya señaladas del predio en este sector, pero en una panorámica más cercana, esto es, un terreno con forma irregular, inculto, pero con presencia de especies vegetales no identificables para el suscrito. (Fotografía N°3)*

*Se observa que entre los sectores expropiados y los que no lo han sido, se encuentran en general incomunicados, quedando aislados uno del otro, con espacios importantes de superficie de terreno en las zonas intermedias”.*

Inspección de la que se concluye que, si bien el Sector B es inculto de forma irregular y con vegetación nativa, está totalmente aislado del Sector C, quedando sin ningún acceso y sin que deslinde con ningún camino público, lo que al analizar el terreno por sí solo, hace muy difícil su aprovechamiento o explotación o prácticamente imposible, al no poder acceder de ninguna forma.

**QUINTO:** Que, por otro lado, con respecto al “Sector C”, los mismos testigos enunciados en el considerando anterior, declararon que en este sector podría ser explotado mediante actividad ganadera, misma actividad para la que se utilizaba antes, y deslinda con el camino Las Amalias, de forma que no queda totalmente aislado, declaraciones que igualmente tienen el valor de plena prueba en virtud del artículo 384 N°2 del Código de Procedimiento Civil.

Por otro lado, en la inspección personal del tribunal, que también tiene valor de plena prueba en conformidad con el artículo 408 ya referenciado, se estableció que: *“Se hace presente que después de avanzar por el interior del predio arribamos a la cima de un pequeño cerro que se encuentra ubicado en el extremo norponiente del inmueble (dentro de lo que los reclamantes describieron de manera arbitraria en el plano que acompañaron con la demanda como “Sector C”), desde el cual se divisa hacia el este un cordón montañoso al fondo, distante a algunos kilómetros, que al parecer está forestado con pinos o alguna especie similar y que según se nos indicó pertenece a un predio aledaño. En el plano del predio de autos, entre el punto que nos encontramos y el sector forestado antes mencionado, se observa un amplio sector con forma sinuosa e irregular, cuya superficie es imposible de ser estimada por el suscrito, que al parecer no se encuentra forestado, pero si tiene vegetación, aunque no es posible determinar de qué especies arbóreas se trata. Se debe destacar que presenta una tonalidad verde más clara que el sector que se ve forestado.*





*Acto seguido nos dirigimos en la misma cima hacia un sector que mira hacia el norte, pudiendo observarse en el plano antes señalado, la continuación del sector mencionado en el párrafo anterior que corre por abajo del cerro, el que también presenta vegetación con una tonalidad diversa del sector que sí está forestado. (Fotografía N°1)”.*

Así, este sector también es un terreno inculto, de forma irregular y con vegetación nativa, con aptitud ganadera y forestal, el que no está totalmente incomunicado pues tiene acceso a un camino público, lo que implica que no reúne los requisitos establecidos en el artículo 9 letra b) del Decreto Ley 2186, pues mantiene la aptitud que tenía antes de la expropiación y su aprovechamiento o explotación no se ha vuelto muy difícil ni prácticamente imposible, siendo concordantes los testigos en que aún puede ser explotado.

**SEXTO:** Que, por todo lo expuesto, se acogerá la petición subsidiar del recurso de apelación deducido por la parte reclamante, rechazándose en lo principal, por cuanto se acogerá parcialmente la reclamación de autos, ordenando únicamente la expropiación del “Sector B” individualizado en autos que, en virtud de las expropiaciones realizadas a los terrenos colindantes, ha vuelto muy difícil su aprovechamiento o explotación, haciéndola prácticamente imposible.

**En cuanto a la adhesión a la apelación de la parte reclamada:**

**SÉPTIMO:** Que, a folio 8 comparece el abogado Procurador Fiscal de Talca, por el Fisco de Chile, José Isidoro Villalobos García Huidobro, adhiriéndose a la apelación, solicitando se confirme el fallo apelado, con declaración, debido a que la reclamante ha sido completamente vencida, de forma que no concurre el presupuesto de exención que se contempla en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, debiendo enmendarse la sentencia a este respecto, a fin de condenar a la contraria al pago de la condena accesoria que debe imponer el juez a la parte totalmente vencida en un proceso o incidencia, para efectos de resarcir al vencedor de los gastos que le ha causado el proceso.

Por lo expuesto, solicita que se le tenga por adherido al recurso de apelación a objeto de que esta Corte confirme la sentencia definitiva de primera instancia dictada en estos autos, con declaración de que se condena en costas a la demandada.

**OCTAVO:** Que, en atención a lo expuesto en los considerandos segundo a sexto de este fallo, se rechazará la adhesión a la apelación de la parte reclamada, por cuanto la reclamante no ha sido totalmente vencida no siendo procedente la condena en costas.

Por estas consideraciones y vistos además lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara:



- I. Que, **se acoge parcialmente** el recurso de apelación interpuesto por la parte reclamante, solo en cuanto se hará lugar a la solicitud subsidiaria y, en definitiva, **SE REVOCA**, sin costas, la sentencia definitiva de fecha 17 de julio de 2019, emanada del 3° Juzgado de Letras de Talca, en autos caratulados PARADA/FISCO DE CHILE, Rol C-223-2018, solo en cuanto a lo decidido en los puntos II. y III. de la parte resolutive del fallo, y en su lugar se declara:
- a. Que, **HA LUGAR parcialmente** a la reclamación deducida por HERMAN HIPÓLITO PARADA LUNCUMILLA, LUCÍA INÉS PARADA LUNCUMILLA, NORA ROSA PARADA PARRA, ROSA ESTER PARADA PARADA, HÉCTOR MARCELINO PARADA PARADA y FABIOLA DEL CARMEN PARADA LUNCUMILLA en contra del FISCO DE CHILE, representado por el Abogado Procurador Fiscal don José Isidoro Villalobos García-Huidobro, solo en cuanto se ordena que se disponga por la demandada la expropiación del Sector B, de 54,472 hectáreas aproximadas de superficie, cuyos deslindes son: Norte, con Lote N°9 expropiado; Oriente, con Rol 220-4 del Proyecto de Parcelación San José de la comuna de Longaví hoy de propiedad de Forestal Celco S.A.; Sur, con Lote N°8; y Poniente, parte con Lote N°8 y parte con Lote N°9, de propiedad de los reclamantes, debiendo dictar el acto expropiatorio adicional o modificadorio dentro del plazo y bajo el apercibimiento señalado en el artículo 9° del Decreto Ley N°2186, debiendo contener todas las menciones señaladas en el artículo 6° del mismo cuerpo legal.
- b. Que no se condena en costas a la demandada por no haber sido totalmente vencida en autos.
- II. Que, **se rechaza**, sin costas, la adhesión a la apelación interpuesta por la parte reclamada.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

**Rol N°1458-2019 Civil**

Redacción del Abogado Integrante don **Ruperto Pinochet Olave**.

LNCJEXCDK

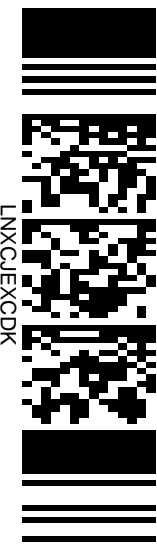


Se deja constancia que no firma el Abogado Integrante don Ruperto Pinochet Olave, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo, por encontrarse ausente.



Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Talca integrada por Ministra Olga Morales M. y Fiscal Judicial Oscar Lorca F. Talca, diecisiete de abril de dos mil veintiuno.

En Talca, a diecisiete de abril de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.  
A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>